



Febrero de 2024.

Magistrada:

BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sección Tercera

Subsección "A"

Correo electrónico; rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
rmemorialessec03sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co-
<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>

REF: CONTESTACION DEMANDA

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

RADICACIÓN: 25000233600020230027600

DEMANDANTE: INCUBADORA SANTANDER S.A.

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA Y OTROS

Con copia a todos los Sujetos procesales:

- La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional: Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co
- La Nación – Policía Nacional: segen.tac@policia.gov.co
- La Nación – Ministerio del Interior: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
- La Nación – Ministerio de Transporte: notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co
- La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co
- Departamento del Valle del Cauca: njudiciales@valledelcauca.gov.co
- Departamento del Cauca: notificaciones@cauca.gov.co
- Distrito Especial de Santiago de Cali: notificacionesjudiciales@cali.gov.co
- Distrito Especial de Buenaventura: notificaciones_judiciales@buenaventura.gov.co; dir_juridico@buenaventura.gov.co
- Municipio de Buga: notificaciones@buga.gov.co
- Municipio de Jamundí: notificacionjudicial@jamundi.gov.co
- Municipio de Dagua: contactenos@dagua-valle.gov.co
- Municipio de Restrepo: juridica@restrepo-valle.gov.co



- Municipio de Yotoco: notificacionjudicial@yotoco-valle.gov.co
- Municipio de Caloto: juridica@caloto-cauca.gov.co
- Municipio de Guachené: notificacionesjudiciales@guachenecauca.gov.co
- Municipio de Puerto Tejada: notificacionesjudiciales@puertotejada.gov.co
- Municipio de Villa Rica: oficinajuridica@villarica-cauca.gov.co
- Ministerio Público: luforero@procuraduria.gov.co
- Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: procesosnacionales@procesosnacionales.gov.co

CARMEN YUDY FIGUEROA MONTENEGRO, mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.551.495 de Popayán, abogada en ejercicio con tarjeta profesional No. 122.553 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico cyudy24@hotmail.com ; debidamente inscrito en el Sistema de Información de Registro Nacional de Abogados SIRNA, con dirección de notificación en la calle 3 No. 5-56 Oficina 403 del Edificio Colonial de esta ciudad, obrando en calidad de apoderada judicial de la Gobernación del Departamento del Cauca, cuyo Gobernador es el Doctor **JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ**, mediante el presente escrito, estando dentro de los términos otorgados, de manera respetuosa, procedo a Contestar la demanda de la referencia al siguiente tenor;

A LOS HECHOS

A LOS HECHOS RELEVANTES GENERALES

Al hecho 1. Parcialmente cierto. Ya que en el paro nacional indicado confluyeron varias organizaciones sociales. Pero desde ya, manifiesto que mi representada no tiene responsabilidad sobre los supuestos hechos y/o omisiones por las cuales se interpone el presente medio de control.

Al hecho 2. Es cierta la movilización social, no es cierto que haya sido la única, en nombre de mi representada no me constan los perjuicios que se indican.

Al hecho 3. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 4. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 5. Es cierto. El presidente anunció el retiro del proyecto.

Al hecho 6. Es cierto, este hecho acaeció durante las protestas sociales.



Al hecho 7. No me consta, Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 8. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 9. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 10. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 11. Es cierto.

Al hecho 12. Es cierto.

Al hecho 13. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 14. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 15. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 16. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 17. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 18. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 19. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 20. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 21. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 22. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 23. Es cierto.

Al hecho 24. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 25. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 26. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 27. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 28. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso



Al hecho 29. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 30. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 31. No me constan los diálogos realizados por los gremios.

Al hecho 32. No me constan los cálculos realizados por los economistas

Al hecho 33. No me consta. La convocatoria a nueva movilizaciones ni el llamando de parte de los gremios mencionados.

Al hecho 34. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 35. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 36. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 37. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 38. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 39. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 40. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 41. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 42. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 43. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.



Al hecho 44. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 45. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 46. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 47. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso

Al hecho 48. Es cierto. De acuerdo a las cifras de los cálculos del DANE

Al hecho 49. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 50. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 51. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 52. No me constan las manifestaciones hechas por el Alcalde de Cali. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 53. Es cierto, si se realizó expedición del Decreto No. 575 de 28 de mayo de 2021 – *Por el cual se impartieron instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público.*” Todo en aras, de restablecer el orden público a nivel nacional.

Al hecho 54. No me constan las manifestaciones hechas por el Presidente de FENAVI. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 55. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 56. Es cierto. También se realizaron marchas en contra de los bloqueos.

Al hecho 57. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 58. Es cierto, lo manifestado con respecto a la moción de censura.



Al hecho 59. Al respecto manifiesto que son Ciertas las cifras emitidas por el DANE, no me constan las demás apreciaciones.

Al hecho 60. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 61. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 62. No me consta la reunión que se indica. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 63. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 64. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 65. Es cierto respecto de la expedición de la Ley 2115 del 14 de septiembre de 2021.

Al hecho 66. Es cierto respecto de la expedición de la resolución 2474 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A LOS HECHOS RELEVANTES ESPECÍFICOS RESPECTO A PRONAVÍCOLA S.A.

Los hechos que se relacionan en este acápite se refieren a situaciones propias o presuntamente acaecidas a la demandante, por lo que, en nombre de mi poderdante manifiesto no constarme ninguno de ellos, debe ser carga de esta, demostrarlos. Desde ya, manifiesto que mi representada no tiene responsabilidad sobre los supuestos hechos y/o omisiones por las cuales se interpone el presente medio de control.

Al hecho 67. No me consta el objeto social ni la conformación de dicha sociedad.

Al hecho 68. No me consta como está conformada la cadena de producción de dicha sociedad.

Al hecho 69. No me constan las estadísticas planteadas.



Al hecho 70. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 71. No me consta el impacto de afectación que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 72. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 73. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 74. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 75. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 76. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 77. No me constan las manifestaciones de amenazas que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 78. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 79. No me constan las manifestaciones de amenazas que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 80. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 81. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 82. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 83. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.



Al hecho 84. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 85. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 86. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 87. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 88. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 89. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 90. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 91. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 92. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 93. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 94. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 95. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 96. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 97. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.



Al hecho 98. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al hecho 99. No me constan las manifestaciones que se indican. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

A LAS PRETENSIONES

En nombre de mí representada, Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por no asistirle responsabilidad dentro de los supuestos facticos o presumibles omisiones que se manifiestan en esta, toda vez que, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA no es la autoridad competente para ser vinculada al presente proceso por carencia de competencia constitucional, legal y funcional, relacionados con las pretensiones del asunto al cual se nos convoca, por lo tanto, no puede ser endilgada ninguna acción u omisión al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, como tampoco existe fuente legal o contractual que disponga la obligación, que declare la responsabilidad de concurrir individual o solidariamente al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, frente al hecho dañoso de un tercero, por las jornadas de paro nacional, y bloqueos a las vías carreteables, realizado por actores sociales en el territorio nacional y el suroccidente colombiano, toda vez que, la competencia funcional de adoptar las medidas necesarias, tendiente a prevenir, controlar o mitigar las alteraciones de orden público y garantizar la movilidad de la población civil corresponde a otras autoridades o entidades del Estado y no al Departamento del Cauca; de concederse las pretensiones, solicito a la honorable magistrada se sirva exonerarla de las declaraciones y condenas, y en consecuencia se sirva declarar probadas las excepciones que presentaré más adelante.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA

En la presente causa pretende el demandante mediante el medio de control de reparación directa que se declare administrativa y patrimonialmente a las demandadas, por el daño antijurídico imputable a las demandadas, sufrido por INCUBADORA SANTANDER S.A., con ocasión del paro nacional ocurrido entre el mes de abril y junio de 2021 y como consecuencia de esta declaración, se las condene al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, por la suma de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$81.851.924.558), o lo que resulte probado dentro del presente proceso, con la indexación y actualización correspondiente.



Antes de realizar los argumentos de la defensa, es dable, traer a colación el carácter que la protesta social tiene en cuanto a garantía de los derechos y libertades de los asociados, ya que esta presupone una expresión legítima de las libertades de expresión y de reunión en aras del control del poder político en un Estado social democrático de derecho que debe ser garantizada tanto por el Presidente de la República como por los gobernadores, alcaldes, y la Policía Nacional. Al respecto El Consejo de Estado en providencia que desató recurso de apelación el día 23 de noviembre de 2022, a demanda tramitada bajo la Radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG), siendo Demandante el señor José Esteban Duarte Santos y otros y Demandado Departamento de Norte de Santander y otros en Acción de grupo manifestó:

2.5. Las entidades públicas no incumplieron sus deberes constitucionales y legales

33. En la demanda se alega que las afectaciones que habrían padecido los palmicultores habrían sido causadas por la omisión de las autoridades encargadas del mantenimiento del orden público, bajo el mando del Presidente de la República, por no haber evitado que los manifestantes bloquearan las vías e impidieran, así, que los trabajadores acudieran a los cultivos de palma, que se cosecharan los frutos y fueran llevados a los lugares donde serían comercializados. La demanda no indicó que las autoridades hubieran abandonado el cumplimiento de sus deberes, ni que se hubiera solicitado su apoyo concreto para garantizar la circulación de los trabajadores y de los productos y que este se hubiera negado. Por el contrario, de la lectura de la demanda se evidencia que, para el grupo, las obligaciones que recaían sobre las autoridades administrativas nacional, departamental y municipal y sobre la Policía Nacional eran de resultado y, por lo tanto, al no haber garantizado el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales que se encontraban en juego, deberían ser condenados a reparar los perjuicios. La demanda expone la existencia de mandatos constitucionales generales, como el fin estatal de proteger a las personas en su vida, honra y bienes y pone de presente la función constitucional del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público, a través del gobernador y el alcalde quienes, en este asunto, actúan como sus agentes, pero no arguye ni demuestra que se hubieran incumplido contenidos obligacionales constitucionales o legales de naturaleza concreta. Contrario a ello, existen en el expediente pruebas de que todas las autoridades demandadas realizaron actividades encaminadas a paliar los efectos del paro campesino³⁰ y, en últimas, a darlo por terminado³¹.

34. La condena solicitada por el grupo demandante se construye sobre dos ideas, que resultan reprochables: por una parte, la de entender que el mantenimiento del orden público es una obligación de resultado, en la que bastaría con constatar que se alteraron dichas condiciones necesarias para la convivencia y que esto causó daños, para que sus responsables sean condenados a reparar. Tal premisa



desconoce el **carácter relativo de la falla del servicio**, que se construye a partir de la consideración concreta de las posibilidades reales para actuar y evitar el daño, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y de los medios de los que se disponía. Ello explica que las obligaciones de protección de las autoridades públicas no puedan ser consideradas como de resultado y únicamente se justifica la condena por la falta de actuación o la actuación tardía o deficiente, cuando otro comportamiento era esperable y racionalmente realizable. El carácter de medio de las obligaciones estatales de seguridad ha sido incluso reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos³². (Subrayado fuera de texto).

35. Por otra parte, la demanda se construye sobre la idea de que frente al paro campesino la única responsabilidad que incumbía a dichas autoridades era evitar las alteraciones al orden público. Esto olvida que en el Estado Constitucional la protesta social es una expresión legítima de las libertades de expresión y de reunión, así como del derecho a participar en la conformación y control del poder político, lo que pone de presente el carácter democrático del Estado y que, al respecto, las autoridades tienen el deber de garantizar su ejercicio. Es decir que tanto el Presidente de la República, como el gobernador y el alcalde, así como la Policía Nacional, se enfrentaban a una tensión entre intereses legítimos: el orden público, como presupuesto de la convivencia y del ejercicio de los derechos y libertades y la protesta social, que debía ser garantizada. Por lo tanto, ante tal tensión, no resultaba legítimo garantizar el orden público en detrimento absoluto de la protesta social³³, ni permitir únicamente la protesta, sin tomar medidas en pro del orden público³⁴. Es por ello que, aunque efectivamente existieron bloqueos de vías, como forma de manifestación, las autoridades propendieron por limitarlos y, en últimas, desarrollaron negociaciones que condujeron a un acuerdo que puso fin al denominado paro campesino. Por lo tanto, en las circunstancias evidenciadas en el expediente, no es posible sostener que la causa de los daños alegados hubiera sido un incumplimiento del contenido obligatorio que recaía sobre las demandadas. (Subrayado fuera de texto).

36. La parte demandante no demostró, entonces, que la conducta exigible de las demandadas fuera diferente a la efectivamente desplegada, en consideración de sus deberes constitucionales y legales, de las circunstancias concretas del caso y de los medios con los que se contaba³⁵ y que tales incumplimientos del contenido obligatorio en particular hubieren sido la causa de los daños alegados. Ante tal ausencia de prueba, no es posible concluir que se hubiera incurrido en falla alguna que hubiera sido la causa adecuada de los daños alegados, mas no probados. Por lo tanto, a más de la ausencia de prueba del daño, se declarará la inexistencia de nexo causal.

29 Corte Constitucional, Sentencia C-242/12

30 Desde el 12 de junio de 2013 se realizó un consejo extraordinario de seguridad, con la participación del alcalde, la personería, algunos concejales y la Policía, con el objeto de tomar medidas respecto del paro campesino. Allí la Policía propuso intervenir con el ESMAD para evitar los bloqueos. El municipio de Tibú declaró el 26 de junio de 2013 la emergencia social, debido al represamiento de basuras, desabastecimiento de alimentos y otras afectaciones derivadas del paro (folio 1510 c. 6).



Se realizaron reuniones del Comité Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres de Tibú, con participación, entre otras entidades, de la Policía y la Cruz Roja y se consideraron las medidas que debían tomarse frente a los bloqueos. Allí la Policía expusieron los enfrentamientos que habían ocurrido y los casos de los agentes que habían resultado lesionados. Existen informes policiales de las actividades desarrolladas en la zona, incluidas las negociaciones tendientes al levantamiento del paro (folio 1256 c. 5) que demuestran que la Policía no dejó de cumplir su misión durante el paro campesino. Se demostró que hubo enfrentamientos con el ESMAD y la fuerza disponible (operativo del 12 de junio de 2013), donde resultaron lesionados algunos policías. En adelante hubo operativos de protección y de desbloqueo y se iniciaron negociaciones. Por su parte, el Batallón de Ingenieros n. 30, CR. José Salazar Arana rindió informe al Tribunal, con fecha del 30 de noviembre de 2015, en donde informó las operaciones tácticas realizadas en la zona de El Catatumbo en los meses de junio, julio y agosto de 2013 (folios 1503-1506 c. 6).

31 Como hecho notorio, el 2 de agosto se acordó el levantamiento del paro, con la presencia del vicepresidente de la República, del gobernador del Departamento de Norte de Santander y de los alcaldes del departamento. Fruto del acuerdo de terminación del paro, se expidió el Decreto 1987 del 12 de septiembre de 2013 *"Por el cual se organiza el Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural"*.

32 *"Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado"*: CtIDH, Sentencia del 16 de noviembre de 2009, Caso González y otras (*"Campo Algodonero"*) Vs. México, considerando 252. *"Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía"*, *ibidem*, considerando 280.

33 *En un caso relativamente equivalente a este, la Nación fue condenada por esta corporación por el uso excesivo de la fuerza en un operativo destinado al desbloqueo de la vía panamericana, en el contexto de manifestaciones de indígenas y campesinos y en afectación, por desproporción, del derecho a la protesta. Para condenar se concluyó que "el actuar de los policiales, pese a estar precedido de un fin legítimo -como era evitar que los campesinos bloquearan la vía panamericana, vía que, de conformidad con la prueba atrás transcrita, habían obstruido los manifestantes en otros puntos del Departamento del Cauca- se realizó sin tener en cuenta las precauciones debidas para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes, y se optó por desmovilizarlos de forma violenta, haciendo uso indiscriminado de gases lacrimógenos y objetos contundentes, con lo cual se causó que algunos de los campesinos se enfrentaran a la Fuerza Pública primero "a piedra y garrote" y, luego, con armas de fuego de las que los policiales hicieron uso e hirieron a algunos manifestantes"*: Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp. 19001-23-31-000-2000-03092-01 (27459). (Subrayado fuera de texto).

34 *"El respeto, la protección y garantía del derecho de toda persona a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en muchas ocasiones puede traer aparejadas incomodidades a quienes no participan de las movilizaciones o de las manifestaciones que se efectúan en ejercicio del mismo. Ni el Constituyente de 1991, ni la Corte Constitucional, han ignorado las implicaciones de salvaguardar ese derecho, fundamento del orden constitucional vigente. Pero identifican en él una demanda a la sociedad, y a todas las instituciones que surgen en su seno, para que acepte un modelo de convivencia basado en la tolerancia hacia la diversidad y el pluralismo, sin los cuales no podría existir ninguna organización que se reputa democrática"*: Corte Constitucional, Sentencia C-742/12.

35 Por el contrario, en un caso relativo a daños causados durante manifestaciones, este tribunal concluyó que debía condenarse al distrito de Barranquilla, ante el incumplimiento de las obligaciones que recaían sobre él, porque *"la falta de planeación y dirección por parte de la demandada, permitió que se concretaran los actos vandálicos que afectaron a la comunidad"*: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 08001-23-31-000-2000-00213-01 (34308).

En efecto, para conjurar los actos de bloqueos ocasionados por el paro nacional, el Presidente de la República En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del Artículo 189, los Artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia y el Artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, expidió el decreto 575 de 2021 por medio del cual se impartieron instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público, que ordenaba de conformidad con el art. 170 de La ley 801 de 2016 *"Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"*, establece en su Artículo 170:

"Artículo 170. Asistencia militar. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No



obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se registrará por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción.

El polémico decreto 575 de 2021, fue suspendido transitoriamente por el Consejo de Estado por considerar que amenazaba el derecho fundamental a la protesta social, hasta en tanto la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no emitiera un veredicto en torno a la legalidad de ese acto administrativo. Esta decisión fue tomada en virtud de acción de tutela interpuesta por varios ciudadanos de la ciudad de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones de orden público, ponían en riesgo el derecho a la protesta social, a la vida, e integridad personal, al debido proceso, y a no ser sometidos a la desaparición forzada

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, que conoció de la demanda en primera instancia, concedió el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria del acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no a derecho.

Además, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y al director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, que, por su conducto, los miembros del poder policivo acaten debidamente los protocolos establecidos para la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección de la protesta social previstos en el Decreto 003 de 2021.

Adicionalmente, pese a que la sala declaró la carencia de objeto frente a la pretensión formulada por los accionantes de ordenar al Gobierno Nacional y al alcalde de Cali a conformar una mesa de trabajo en las que se discutan las demandas sociales objeto de las protestas y sus posibles soluciones, se instó a los protagonistas de las mesas a mantener el diálogo como mecanismo de superación de las diferencias y las problemáticas que están siendo denunciadas en estas movilizaciones.

Para explicar su decisión, la Sección Cuarta comenzó por precisar que la amenaza del derecho a la protesta social debía analizarse frente al Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, pues, durante el trámite de la acción de tutela, el Presidente de la República, mediante dicho decreto, dio inicio a la asistencia militar prevista en el artículo 170 de Ley 1801 de 2016, que era justamente lo que los demandantes solicitan suspender, por considerar que se está amenazando su derecho a la protesta social.

Posteriormente, la Sección Cuarta sostuvo que, luego de analizar el Decreto 575 de 2021, se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público



tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares. Expuso que si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave al orden público, lo cierto es que, en esos casos, lo que resulta admisible, y con criterios de necesidad y proporcionalidad, es el uso de la fuerza policial, mas no militar.

Para sustentar la decisión, la Sección Cuarta advirtió que en la sentencia C-281 de 2017, la Corte Constitucional, determinó que “la protesta social por sí sola no representa una amenaza contra el orden constitucional ni contra la soberanía nacional. Por el contrario, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por las autoridades”.

A juicio de la Sala, los motivos que respaldan la activación de la asistencia militar responden a operativos de control y contención de las movilizaciones sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, intervención militar que fue declarada inconstitucional en la sentencia C-281 de 2017, por desconocer justamente la separación orgánica y funcional entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Por otra parte, en cuanto al empleo de la fuerza y de las armas de fuego, la Sala advirtió que al expediente fueron allegados informes sobre 15 muertes que fueron resultado de hechos de violencia registrados en las protestas, tres de las cuales resultaron atribuibles a la Fuerza Pública. La sala aclaró que si bien en estos casos pueden presentarse hechos de violencia y que, para restablecer el orden, la Policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley, y limitar el ejercicio de algunos derechos propios de la protesta, una cosa es perder la garantía de poder seguir participando en la manifestación, por tornarla violenta, y otra, muy distinta, perder los demás derechos reconocidos en la Constitución, como la vida, la integridad personal y el debido proceso.

La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza.

La sentencia fue expedida por la Sección Cuarta, conformada por las magistradas Stella Jeannette Carvajal Basto, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, el magistrado ponente, Julio Roberto Piza R. y el magistrado Milton Chaves García, quien salvó el voto.

Por lo anterior, Se insiste, en que, el Gobierno Nacional, siempre estuvo atento a buscar soluciones para llegar a acuerdos con los dirigentes de la protesta social para ponerle fin, constantemente se reunieron en las mesas de trabajo en donde se discutieron las demandas sociales que fueron objeto de la protesta social, hasta



finalmente llegar a un acuerdo que finalizó el paro nacional y con ello el levantamiento de todos los bloqueos y demás acciones tomadas durante las protestas sociales.

No obstante lo anterior, debo aclarar que El Departamento del Cauca no tiene responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana. El Departamento como ente territorial y conforme a lo establecido en la Constitución en su artículo 298, *tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.* Sin embargo, no está en cabeza de este como entidad territorial el mantenimiento del orden público y es de esta manera que en el Departamento del Cauca, el mantenimiento del orden público le corresponde a la Policía y el gobernador no es más que agente del Presidente en la materia. Las políticas públicas en materia fiscal que provocaron el paro son de responsabilidad del gobierno nacional, y no del departamento.

EXCEPCIONES DE FONDO

Además de todas aquellas que de conformidad con el literal 3 del artículo 175 del C.P.A.C.A. encuentre probadas el señor Juez, y las que para el efecto señale el Código General del Proceso propongo las siguientes:

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Dentro del presente acápite se demostrará las circunstancias por las cuales el Despacho Judicial deberá declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Cauca, respecto del caso que ahora es objeto de debate.

Debe mencionarse que el principio de legalidad, respecto de las autoridades públicas, se constituye como el fundamento para el ejercicio de sus competencias, lo anterior en virtud de lo establecido por el artículo 121 de la Constitución Política, según el cual ninguna autoridad pública tiene la posibilidad para ejercer función alguna distinta a las que han sido atribuidas expresamente por la Constitución o la ley, aspecto que permite concluir que la competencia se incorpora como un presupuesto de validez de los actos o actuaciones que son proferidos por los órganos estatales.

Lo anterior ha permitido a la doctrina erigir el concepto de contenido obligatorio, según el cual existen, como consecuencia del principio de legalidad antes mencionado, unas prohibiciones y límites a la autonomía de la voluntad estatal que influye claramente en la limitación del decálogo de posibilidades para adoptar



decisiones. En lo que hace a ese respecto, se concluye que, según el concepto de contenido obligacional, un determinado órgano estatal solamente podrá actuar de acuerdo con el marco de competencias que le han sido otorgadas vía Constitución o vía legal, y -además- la actuación que desarrolle en cumplimiento de ese marco debe acatar las reglas procedimentales dictadas previamente para su perfeccionamiento.

Ahora bien, una vez estudiado el contenido obligacional que compromete a las entidades demandadas, resulta forzoso concluir que, dentro del caso concreto, no existe norma jurídica que permita concluir que fue una omisión o actuación del Departamento del Cauca la que condescendió a que se produjera el daño antijurídico por el cual se demanda.

El Departamento del Cauca no tiene la "*calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso*", toda vez que carece de competencia legal y funcional, para que se lo vincule al presente proceso, puesto que no le es factible atender el cumplimiento de las labores que le corresponden a otras autoridades, como se reitera, el Departamento del Cauca, tiene funciones de coordinación y articulación. Por tanto la competencia funcional de adoptar las medidas necesarias, tendiente a prevenir, controlar o mitigar las alteraciones de orden público y garantizar la movilidad de la población civil corresponde a las fuerzas militares y de policía, y no al Departamento del Cauca.

De allí que es necesario recordar que los principios básicos del derecho procesal, indican que las obligaciones jurídicas, son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la Ley a responder y, en este caso, el Departamento del Cauca, de ninguna manera lo es.

2. Inexistencia de falla o falta del servicio de parte del DEPARTAMENTO DEL CAUCA

De acuerdo con sentencia del Consejo de Estado – del 7-03-2012 Radicación número: 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042) se estableció que:

La falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (...) así, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio



que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo.

- El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio;*
- la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan*
- y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal.*
- Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.*

Así mismo esta corporación ha indicado que no se puede imputar responsabilidad al Estado basándose en normas que tienen obligaciones generales, trayendo a colación el art. 2 constitucional ya que, de hacerlo, debería responder por todos los daños que sufran las personas, no derivándose directamente obligaciones de reparación o resarcimiento. Por tanto, las entidades públicas solo son responsables civilmente cuando con su acción u omisión causen un daño a otro (art. 2341 CC), pues solo en esos eventos puede surgir la obligación indemnizatoria.

El Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, consagra la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual establece que para su configuración, debe existir un daño antijurídico causado a un administrado y que el mismo le sea imputable al Estado, tanto por su acción como por su omisión; es decir, la responsabilidad extracontractual del Estado se acredita con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

Al respecto, el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha reiterado en innumerables ocasiones, que la Responsabilidad del Estado no se



limita únicamente a la ocurrencia del daño, sino que ha advertido que el mismo debe ser antijurídico, esto es, que la parte que lo sufre, no tenga la obligación de soportarlo; no obstante, el otro atributo generador de la responsabilidad, en la cual radica la posibilidad que el Estado pueda reparar integralmente, es que el daño antijurídico sea atribuible a éste, y en ese sentido, dicha corporación ha expresado lo siguiente: (Subrayado fuera de texto).

“En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas)”.

(Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque)

Ahora bien, el desarrollo de la sociedad y de la concepción del Estado, que día tras día afronta nuevos y mayores retos, ha llevado a la jurisprudencia y la doctrina nacional, a reconocer poco a poco que el deber de reparación es independiente del hecho desencadenante del daño, por lo que ya nada importa si éste tuvo origen en actos ilícitos o en la conducta regular del agente. Entonces, la tradicional falla en el servicio ha dejado de ser el único título de imputación válido, y paralelo a éste, se han consolidado otros regímenes aplicables como el daño especial o el riesgo excepcional, ambos de carácter objetivo y que derivan de principios generales del derecho como la equidad, la solidaridad o la igualdad ante las cargas públicas.

De lo anterior, se extrae que la Responsabilidad del Estado debe ser analizada teniendo en cuenta su régimen aplicable, toda vez que, de ello depende la forma en que se le puede atribuir el daño antijurídico al Estado; los Títulos de Imputación aplicables para declarar la Responsabilidad Estatal son los siguientes:

- Falla en el Servicio
- Daño Especial
- Riesgo Excepcional

Para definir el régimen aplicable, resulta preponderante remitirse al texto de la demanda, según el cual, la parte accionante estructuró en sus argumentos presuntas imputaciones atribuibles al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, por los eventos originados en las jornadas de paro nacional, y bloqueos a las vías carretables, ocurrido entre el 28 de abril y junio de 2021 realizado por actores sociales en el territorio nacional, y por ende en el suroccidente colombiano como



reacción a la reforma fiscal presentada por el gobierno nacional, que a su decir, ocasionaron daños y perjuicios, pretendiendo inferir que se produjo como consecuencia de la omisión al cumplimiento de los deberes estatales de restablecer el orden público, proteger derechos y garantía de rango constitucional, dejando a la población a merced de quienes se escudaron en la protesta.

El Gobierno Nacional y todos los entes públicos, que en la presente acción fungen como demandados, buscaron la forma de llegar a un acuerdo con los actores del paro nacional mediante las mesas de trabajo que se establecieron constantemente, llegando a un acuerdo concertado entre las partes para levantar el paro y desbloquear las vías nacionales que limitaban la locomoción, así mismo la Policía Nacional hizo presencia en todo el territorio nacional realizando operativos, pero que, dada la magnitud de la protesta no se lograron conjurar de forma inmediata.

De acuerdo a los hechos de la demanda, se indica que el Presidente de la República se reunió con el gremio avicultor con el fin de buscar soluciones a raíz del prolongado paro nacional, la fuerza pública estuvo permanentemente en los sectores álgidos del conflicto social, al igual que se insistió en que se permitiera el paso de ayuda humanitaria, demostrando con ello que el Gobierno nacional nunca desconoció el cumplimiento de sus funciones enmarcadas en la Constitución y en la ley. Así las cosas, no existe falla en el servicio en la presente causa.

El togado fundamenta la presunta responsabilidad en concreto del DEPARTAMENTO DEL CAUCA, porque a su decir le pidió la adopción de medidas para poner fin a la obstrucción de vías y permitir el libre tránsito, de personas e insumos para para la operación de la empresa avícola, que me permito transcribir;

5.4.8. Departamento del Cauca. En línea con la(sic) consideraciones expuestas, la parte actora también alarmó a las autoridades del Departamento del Cauca de la grave situación de orden público y su impacto en el funcionamiento normal de la empresa ante la imposibilidad de transportar materias primas, insumos y alimentos a lo largo del territorio.

Para soportarlo, se 80 tiene que el 31 de mayo de 2021 (ver Carpeta No. 5 del enlace de pruebas), el Gerente General de Pronavícola S.A. elevó una solicitud ante el Gobernador del Departamento del Cauca, Dr. Elías Larrahondo, con el ánimo de implementar, de manera inmediata, corredores humanitarios para el transporte de materias primas y pollitos de un día que estaban en riesgo de muerte al no poder llegar a las granjas de destino.

En esta oportunidad, se expresó:

“RAFAEL IGNACIO SERRANO URDANETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 19.253.978 de Bogotá, actuando en mi calidad de Gerente de la sociedad PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A. - PRONAVÍCOLA S.A., sociedad legalmente constituida con NIT 890.321.213-9, con sede principal en el Municipio de Yotoco y operación a nivel nacional, desde hace más de 40 años sociedad (sic) que genera 704 empleos directos, rurales y legales, producimos 42 millones de pollitos de un día de nacidos y 15



millones de pollitas ponedoras de un día de nacidas anualmente, producción que entregamos a lo largo y ancho de todo el país y que tienen que llegar a su granja de destino dentro de las siguientes 24 horas a su nacimiento. Comprenderá usted, que Nuestra Industria no puede parar. Trabajamos con seres vivos y perecederos que no nos permiten hacerlo. Somos usuarios permanentes de las diferentes vías nacionales y los bloqueos que estamos sufriendo desde Abril 28 a raíz del Paro Nacional, están causando enormes perjuicios a nuestra actividad, al no poder desplazar por las vías nacionales las materias primas, y seres vivos que movemos todos los días en nuestra operación. Señor Gobernador, acudimos a usted, de manera urgente, con el fin de informar la situación que hasta la fecha afecta nuestras operaciones, tras los bloqueos en las vías a causa del paro nacional donde no se nos es permitido la circulación de nuestros camiones con pollito de un día con destino a las diferentes granjas de nuestros clientes. Hemos tenido innumerables reuniones con autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales y no encontramos oídos a nuestra dura realidad. No se está actuando para garantizar la libre movilidad y derecho al trabajo.

Entendemos que hay razones que justifican las movilizaciones y marchas, pero no compartimos que se bloquen las vías nacionales ni la destrucción de bienes públicos y privados. A pesar de lo anterior, a la fecha cumplimos 33 días de paro continuo y la situación solo se hace peor (...)" Como se ha anticipado, en esta oportunidad se le pidió a la primera autoridad de policía del Departamento la adopción de medidas para poner fin a la obstrucción de vías y, por contera, permitir el libre tránsito de personas, materias primas e insumos necesarios para la operación de la empresa avícola, situación de orden público que no se atendió oportunamente, puesto que para finales de mayo seguían reportándose múltiples bloqueos en las vías departamentales.

3. EL HECHO DETERMINANTE DE UN TERCERO. .

De acuerdo con el Consejo de Estado, El hecho del tercero, *“el hecho de un tercero exonera de responsabilidad a la administración en el derecho administrativo colombiano, siempre y cuando se demuestre que dicho tercero es completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexa causal” (...).*

Así mismo, es indispensable que el hecho del tercero pueda tenerse como causa exclusiva del daño, producido en tales circunstancias que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa extraña, ajena a la conducta de quien produjo el daño.

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que el hecho del tercero constituye una causal exonerativa de responsabilidad del Estado, en aquellos casos en los cuales dicho tercero no dependa de la propia administración y además que el hecho aludido sea causa exclusiva o determinante del daño.

En relación a las características del hecho de un tercero, la jurisprudencia ha dicho que el hecho del tercero debe ser imprevisible, ya que si puede ser prevenido o evitado por el ofensor, este le debe ser considerado imputable conforme al principio según el cual *“no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo”*. Y debe ser irresistible ya que, si el causante del daño puede



válidamente oponerse a él y evitarlo, posteriormente no lo puede alegar como causal eximente de responsabilidad.

Uno de los casos más importantes en los cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado se refirió al hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, fue en el caso de la demanda interpuesta contra la Nación por los perjuicios causados a la familia del Magistrado Carlos Medellín, producto de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de Noviembre de 1985. En dicha sentencia el Consejo de Estado precisó la concepción que se tenía en la jurisprudencia respecto al hecho del tercero, en los siguientes términos:

“Es cierto que el hecho del tercero constituye causal exonerativa de responsabilidad estatal, en tanto que de ese tercero no dependa la propia administración y además que el hecho aludido sea causa exclusiva y determinante del daño (...). Se recuerda que el hecho del tercero para valer como causal exonerativa de responsabilidad debía de ser, en el sub judice, irresistible e imprevisible para el Estado Colombiano, en razón a que si estaba en condiciones de preverlo o resistirlo, como en efecto lo estuvo y a pesar de ello no lo hizo, o lo hizo deficientemente, tal comportamiento culposamente administrativo que vincula su conducta con el referido daño, bien puede considerarse como causa generadora de éste, sin que en tales condiciones resulte interrumpida la relación de causalidad anteriormente advertida”.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que los presupuestos para que se configure el hecho del tercero, son los siguientes:

- Que el hecho del tercero sea la causa única del daño.
- *Que el tercero se encuentre debidamente individualizado e identificado.*
- Que no tenga ningún vínculo de dependencia o relación con el causante.
- Que sea imprevisible e irresistible para el causante del daño.

(...)

Por tanto los hechos que ocasionaron daños y perjuicios a INCUBADORA SANTANDER S.A, por las jornadas de paro nacional, y bloqueos a las vías carreteras, ocurrido entre el 28 de abril y junio de 2021, realizado por actores sociales en el territorio nacional, y por ende en el suroccidente colombiano, que no tenía ni tiene ningún vínculo de dependencia o relación con mi representada, lo que constituye el hecho dañoso de un tercero (actores sociales de la movilización), en los cuales no participó activa ni pasivamente en la obtención del resultado, permiten



concluir la inexistencia de responsabilidad de la entidad departamental, que represento.

4. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El artículo 90 de la Constitución Política señala que *“el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”*. En ese orden de ideas, para que una entidad estatal sea declarada responsable por la producción de un daño antijurídico, debe acaecer lo que la dogmática jurídica conoce con el nombre de elementos de la responsabilidad.

En lo que hace a ese respecto, se ha señalado que tales elementos son: una actuación u omisión de la autoridad administrativa; un daño antijurídico; el nexo de causalidad entre la actuación u omisión de la autoridad administrativa y el daño causado.

Dentro del caso sub examine, se tiene que, la parte demandante pretende con los medios probatorios demostrar la responsabilidad del Departamento del Cauca, por daños y perjuicios ocasionados a la INCUBADORA SANTANDER S.A. lo que constituye el hecho dañoso de un tercero (actores sociales de la movilización), que la parte convocante expresa la totalidad de los hechos de los que fue víctima y que pudieran implicar la comisión de un delito, fueron puestos en conocimiento de las autoridades penales a través de las denuncias que se hicieron.

Así las cosas, respecto de las obligaciones que posee el Departamento del Cauca, *“lo que principalmente guarda relevancia jurídica es la forma como estas se concretan, toda vez que son las acciones u omisiones materiales, los fenómenos a través de los cuales se puede constatar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones administrativas, así como los que dan lugar a una eventual responsabilidad del sujeto que cumple una función administrativa”*. Para conseguir dicho objetivo, entonces, resulta necesario acudir a lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, dado que, para ese efecto, el límite impuesto a las actuaciones de los órganos estatales lo impone el principio de legalidad, el cual, para las actuaciones administrativas, *“se traduce en la necesidad de un soporte normativo para el desarrollo de actividades específicas relacionadas con la función administrativa. De esta manera, la concreción de las actividades administrativas, es el fenómeno que debe observarse, para la constatación del efectivo cumplimiento o no, de obligaciones propias de los sujetos que dan desarrollo a la función administrativa”*.



En el presente caso objeto de litigio, a pesar de que la parte demandante realiza un esfuerzo argumentativo a través de la interpretación normativa para derivar la responsabilidad de la entidad que represento, sus señalamientos no tienen la contundencia para comprometer la misma y, por el contrario, ponen en evidencia que no existe acción u omisión que puedan conllevar a la declaratoria de responsabilidad.

En efecto, como primera medida, se tiene que del análisis normativo y fáctico realizado por la parte demandante, se refiere a las competencias que tienen otras entidades del Estado, quizá las directamente responsables -de existir el acervo probatorio y contradicción del mismo que permita inferir tal responsabilidad- por los hechos que se puedan presentar en las medidas de prevenir, controlar o mitigar las alteraciones de orden público y garantizar la movilidad de la población civil corresponde. Así se observa con el soporte argumentativo y normativo respectivo planteado en el escrito de la demanda.

Teniendo presente la evidente ausencia de nexo causal como elemento esencial para que se configure el daño antijurídico, se demuestra que el Departamento del Cauca, no tiene competencia directa, ni injerencia por acción u omisión administrativa sobre los hechos que ocasionaron daños y perjuicios a la INCUBADORA SANTANDER S.A., por las jornadas de paro nacional, y bloqueos a las vías carreteables, ocurrido entre el 28 de abril y junio de 2021, realizado por actores sociales en el territorio nacional, y por ende en el suroccidente colombiano lo que constituye el hecho dañoso de un tercero (actores sociales de la movilización), por tal motivo, debe concluirse que en su conducta no medio ningún tipo de omisión, retardo o defectuoso funcionamiento por la entidad que represento.

4. INNOMINADA O GENÉRICA.

Sírvase declarar de oficio todos las que sean advertidas y probados en el curso del proceso y que resulten favorables a la entidad que represento.

PRETENSIONES.

Se solicita a su honorable despacho, teniendo en cuenta el presente escrito de contestación de la demanda, se acceda a las siguientes pretensiones:

1. Se declare la prosperidad de las excepciones propuestas por el DEPARTAMENTO DEL CAUCA
2. Se exonere de toda responsabilidad al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, por los daños materiales e inmateriales que se invocan en la presente acción.
3. Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.
4. Se me reconozca personería jurídica para actuar dentro del presente proceso



PRUEBAS

Solicito se tengan en cuenta,

- Las documentales allegadas con la demanda
- las que se lleguen en las contestaciones que realicen las partes demandadas,
- se tengan en cuenta los hechos que fueron de público conocimiento dentro de las actuaciones del Gobierno Nacional para mitigar los efectos del paro nacional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 140 del C.P.A.C.A.; Artículos 37 y 90 de la Constitución Política

ANEXOS

1. Adjunto poder debidamente otorgado con sus respectivos anexos

NOTIFICACIONES.

- Departamento Del Cauca en el correo electrónico notificaciones@cauca.gov.co
- La suscrita apoderada al correo electrónico: cyudy24@hotmail.com

De la señora Magistrada,

Atentamente:

CARMEN YUDY FIGUEROA MONTENEGRO

C. C. No. 34.551.495 de Popayán

T. P. No. 122.553 del C.S.J.

Abogada Grupo de Defensa Judicial

Oficina Asesora Jurídica

Gobernación del Cauca

Aprobó: Adriana Judith Martínez Perlaza
Revisó: Manuel Domingo Meza